



**ROSA  
LUXEMBURG  
STIFTUNG**  
OFICINA DE  
ENLACE MADRID

en  
**PERS  
PEC  
TIV  
A**  
Seguimiento periodístico de  
la realidad política española  
**N1 | abril 2020**

## **UNIDAS PODEMOS SE LA JUEGA EN EL GOBIERNO: LA DISPUTA POR UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS DEL CORONAVIRUS.**

*El primer Gobierno de coalición de la democracia afronta resolver la pandemia como su gran reto • El Ejecutivo ha sacado adelante medidas de carácter social para evitar “que esta crisis la paguen los de siempre” • Las disputas entre ministros del Gobierno español perfila una controversia global: la necesidad de una intervención estatal en esta crisis frente a la ortodoxia neoliberal.*

---



**Sato Díaz | @JDSato**  
29/03/2020\*

*\* Este artículo se terminó de redactar el domingo 29 de marzo.  
Analiza la respuesta del recién nacido Gobierno de coalición español a la crisis generada por la pandemia de covid-19.  
La rapidez de los acontecimientos hace que en pocos días haya que actualizarlo, continuarlo o ampliarlo.*

De repente todo paró. La pandemia del coronavirus covid-19 ha generado una catarsis generalizada de ámbito global. En pocas semanas, aquella epidemia que se inició en Wuhan, en China, se ha expandido por todo el planeta generando una de las crisis de mayores dimensiones de la historia reciente. Es un momento catárquico. Tras esto, el mundo habrá cambiado.

Es imposible saber hacia dónde se producirá la mutación de nuestras sociedades, es imposible imaginar el nuevo escenario que vendrá. El sistema económico, político y social que imperaba actualmente está sometido a una tensión extrema. La disputa ideológica y política hoy se condensa mucho más, pues ante el precipicio de lo desconocido, la teoría política intenta crear nuevos horizontes y la práctica, el camino que nos lleven a ellos. Nada está escrito. La evolución de la pandemia es una incógnita, la emergencia sanitaria se agrava, las consecuencias económicas están por contabilizar, las respuestas políticas son difusas y las reacciones sociales, imposibles de divisar. Desde luego, que con el paso de los días se evidencia que esta pandemia también tendrá un importante impacto geopolítico. La guerra comercial entre China y Estados Unidos que se venía dirimiendo se intensifica en la situación de alerta mundial en la que nos encontramos. China, que a ojos del mundo está consiguiendo superar la crisis sanitaria, ha comenzado una iniciativa diplomacia de cooperación con los países más afectados.

En Europa, tanto Italia como España mantienen relaciones bilaterales con el gigante asiático, que ofrece ayuda sanitaria, tanto en materiales como en profesionales. Una relación difícil, dos culturas muy diferenciadas y unos mercados a punto de estallar, repletos de piratas. La llegada del coronavirus a Estados Unidos se ha demorado con respecto a Asia y Europa, pero puede golpear con fuerza, ya lo está haciendo. El sistema público de salud estadounidense es débil y la enfermedad puede generar estragos en las clases populares norteamericanas. La falta de protección a los trabajadores creará una crisis brutal. Mientras, los reproches públicos entre las dos potencias, Estados Unidos y China, suben la tensión con más o menos picos de intensidad. La disputa geopolítica se está desarrollando mientras los muertos por la pandemia aumentan exponencialmente.

La Unión Europea se muestra lenta, de nuevo, a la hora de dar respuestas coordinadas a la crisis. Prueba de ello es el cierre de fronteras y que cada estado miembro esté desarrollando una estrategia diferenciada para afrontar el problema, más allá de las apelaciones a una actuación coordinada, hasta el momento inexistente. Poca coordinación desde Bruselas más allá de la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo por valor de 750.000 millones de euros para relajar a las bolsas y primas de riesgo.

---

*La disputa geopolítica se está desarrollando mientras los muertos por la pandemia aumentan exponencialmente.*

---



Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (Foto: La Moncloa)

Las recientes reclamaciones de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, señalan hacia un Plan Marshall Europeo y de unos coronabonos que faciliten el gasto público cuando la epidemia pase. Sánchez, Emmanuel Macron, presidente de la República de Francia, y el presidente italiano, Giuseppe Conte, lideran un grupo de estados que reclaman esos eurobonos a través de un carta firmada también por Sophie Wilmès, primera ministra belga, Kyriakos Mitsotakis, primer ministro griego, Leo Varadkar, jefe de Gobierno de

Irlanda, Xavier Bettel, primer ministro de Luxemburgo, António Costa, primer ministro de Portugal, y Janez Janša, primer ministro esloveno.

La negativa de la alemana Angela Merkel y el holandés Mark Rutte deja a la Unión Europea y las instituciones comunitarias en una posición muy delicada. Ante las disputas entre estados miembros de la Unión, las instituciones supraestatales enmudecen. Suenan tambores que recuerdan a 2008, cuando la salida a la crisis económica partió del endeudamiento de los países menos ricos y el recorte de derechos sociales y de libertades en todo el arco sur europeo. España, Italia, Portugal, otra vez Grecia... difícilmente podrán defender posiciones europeístas ante sus pueblos que están viviendo una tragedia si el norte no empuja hacia una reconstrucción post-crisis común.

Como vemos, el estado-nación toma posiciones frente a lo supraestatal y lo supranacional. El modelo chino genera espejismos en marzo de 2020: estado fuerte, predominancia de lo público como forma de solucionar la crisis, disciplina social ante las órdenes del gobierno, control de internet y de los mensajes comunicativos tanto internos como hacia el exterior de China. El debate del futuro inmediato: la dicotomía entre seguridad y libertad y el cómo conjugar estos valores superiores. El resultado de esta disputa dependerá mucho de cómo se reorganice geopolíticamente el mundo tras la pandemia.

Frente al modelo chino de unidad de acción frente a la pandemia, en Europa, los distintos dirigentes no consiguen uniformar los mensajes en una sola voz, como hemos visto. Y, concretamente en España, contrastan las constantes voces políticas discordantes con la gestión de la crisis del Gobierno y el cómo algunas formaciones políticas o dirigentes territoriales aprovechan para sacar rédito partidista del momento.

Los mercados se han mostrado inútiles también en un momento de crisis. En cuanto la epidemia iba tomando fuerza, las caídas de las principales bolsas internacionales demostraron que el capitalismo financiero y especulativo es débil e inoperante en momentos de catástrofe, de inestabilidad o cambios profundos. Lo público, hasta el momento, es el lugar desde el que se da respuesta a la crisis. Lo privado huye, como algunas residencias de ancianos de Madrid, que abandonaron a los enfermos hasta su muerte. La soberanía parece regresar a los estados. Desde sus poderes públicos se reorganizan los desmanes que producen unos mercados asustadizos y la poca capacidad de coordinar respuestas desde organismos supranacionales.



Cotización del Ibsx 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid. (Foto: EFE)

## El modelo federal del Estado en la UCI

En el Estado español, por su carácter plurinacional y federalizante, la crisis del coronavirus y la declaración del estado de alarma ha supuesto una concentración del poder en un único mando, el Gobierno estatal, más concretamente en el Ministerio de Sanidad, epicentro de la gestión de la crisis, y, sobre todo, en Moncloa, la Presidencia del Gobierno. Una vez más, la soberanía se concentra en el estado-nación, en el Gobierno estatal, dejando a las autonomías sin demasiado poder de decisión en este momento. En un país como España, donde las tensiones territoriales son enormes, esta tendencia centralista con la asunción de todo el poder por parte del Gobierno central y el rol cada vez más protagonista del Ejército tendrá consecuencias políticas.

De hecho, durante estos días hemos visto cómo se escenifica la oposición al Gobierno desde, precisamente, algunos gobiernos autonómicos. El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, se ha mostrado muy duro con Sánchez por no haber confinado Catalunya y la Comunidad de Madrid, las regiones más golpeadas por la epidemia, en un primer momento. Las críticas al decreto del estado de alarma por la recentralización que supone el que sea el Ministerio del Interior, por ejemplo, el que tenga las competencias sobre las policías autonómicas, han sido constantes desde Catalunya y también desde Euskadi. El conflicto catalán ha sido protagonista durante los últimos años de la

política española, ahora se ha echado a un lado por la emergencia sanitaria, pero está presente en todo momento, reapareciendo con cada decisión que tome el Gobierno y afecte a Catalunya.

Llama la atención, por otro lado, el que el lehendakari del País Vasco, Íñigo Urkullu, se haya mostrado contrario también a esta recentralización pero cerrara filas con el Gobierno español en un primer momento. No es momento de críticas, sino de apretar hacia adelante. Las elecciones vascas y gallegas estaban programadas para el 4 de abril, tendrán que esperar para celebrarse unos meses, sin fecha determinada. La discrepancia con el Gobierno español llegaría más tarde, el 28 de marzo, cuando Sánchez anunciara una paralización más severa de la actividad laboral y empresarial en favor del confinamiento. Torra aplaudiría esta medida, pues era una reclamación de Catalunya desde el primer momento, el lehendakari Urkullu, del partido conservador y nacionalista vasco PNV, afeó la decisión de Sánchez.

En cambio, es desde algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP desde donde se está realizando la verdadera oposición a Sánchez. Murcia, pero especialmente la Comunidad de Madrid, son estos lugares donde gobiernos de derechas y ultraderechas critican cada paso que da el Gobierno de coalición. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, está en la delantera



Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid (Foto: Comunidad de Madrid)

para convertirse en la líder de la oposición, simbólica, de Sánchez durante esta crisis. Desde su confinamiento particular, pues ha dado positivo en covid-19, no hay día que no atice al Gobierno español desde las redes sociales o apariciones televisivas. Se queja de la gestión de las compras internacionales de material sanitario y de protección para los profesionales, sin embargo, los aviones que iban a traer desde China el material comprado por el propio gobierno autonómico madrileño llevan varios días desaparecidos.

Gobierno de coalición, decíamos. Y es que este momento excepcional, esta situación catárquica que amenaza con cambiar los modos de vida y las relaciones personales, sociales y políticas, ha pillado al Estado español en un momento político innovador en cuanto a los componentes del Gobierno se refiere. Por primera vez desde la II República, previa a las cuatro décadas de dictadura nacional-católica de Francisco Franco, hay un gobierno de coalición. Es decir, un gobierno con más de un partido en su seno. Y, por primera vez, desde entonces, hay ministros comunistas y del espectro de la izquierda al PSOE sentados en el Consejo de Ministros. Un gobierno de coalición progresista que tendrá que abandonar su programa político para afrontar una crisis inesperada y sumamente grave.

---

*Y es que este momento excepcional, esta situación catárquica que amenaza con cambiar los modos de vida y las relaciones personales, sociales y políticas, ha pillado al Estado español en un momento político innovador en cuanto a los componentes del Gobierno se refiere.*

---

## Reacción gubernamental a la epidemia

La crisis del coronavirus covid-19 llega a España en un momento político, como decíamos, innovador y sin precedentes. El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos es muy joven y tiene ante sí el mayor examen posible, lograr superar la actual situación gravísima de emergencia sanitaria y, después, paliar los efectos económicos devastadores que aparezcan motivados por la epidemia, teniendo en cuenta además que la economía española, europea e internacional se iba contrayendo desde hace meses. El momento es de especial relevancia para Unidas Podemos que ansiaba llegar al Gobierno para evitar que “una nueva crisis la paguen los de siempre”. La crisis se ha adelantado y sus dimensiones son infinitas.

Y es que Sánchez lograba ser investido presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados hace tan solo semanas, el 8 de enero. El Gobierno tomaba posesión cinco días después, el 13 de enero. Los ministros comenzaban su trabajo en sus respectivas funciones. Dos meses después, el 14 de marzo, el Consejo de Ministros decretaba el estado de alarma durante quince días, que se amplía a 15 días más, hasta el 11 de abril, de momento. Así, se interrumpe drásticamente la hoja de ruta gubernamental. Ahora, solo hay una cuestión sobre la mesa: covid-19 y sus consecuencias.

El decreto de alarma del 14 de marzo, en un primer momento, supuso la asunción de medidas extraordinarias centradas en una cuestión principal: detener el número de contagios de la nueva enfermedad y poner todos los esfuerzos y recursos para tratar a los enfermos. Ese día, quedaban prohibidos todos los desplazamientos que no fueran de fuerza mayor, como comprar alimentos, medicinas o artículos de primera necesidad. Sin embargo, no se prohíbe asistir a trabajos que no son imprescindibles. Esta medida llegaría después, el 29 de marzo, con la puesta en marcha del permiso retribuido revisable por parte del Ministerio de Trabajo. Se establecía una lista de trabajos esenciales, los únicos trabajadores que se podrán desplazar desde el 30 de marzo al 9 de abril, para fortalecer el confinamiento.

Volviendo al decreto del estado de alarma del 14 de marzo, en lo referente al ámbito laboral, el decreto especificaba que “los empleadores, tanto públicos como privados, estarán obligados a facilitar medidas que permitan la prestación laboral o funcional de los empleados por medios no presenciales siempre que ello sea posible”, la apuesta por el teletrabajo. Además, el estado de alarma permite toda una serie de medidas como la militarización la vida pública, el control de fábricas por el Estado o poner los hospitales privados al servicio público; no permite, sin embargo, restringir las libertades fundamentales de los ciudadanos, a pesar de que se han podido contemplar en redes sociales diferentes escenas de abuso de poder policial sobre paseantes. Se cerraban los comercios que no sean de distribución alimentaria, farmacias, kioskos o de productos de primera necesidad.

En ningún momento queda nacionalizada, con estas medidas, la sanidad privada. Sigue siendo de titularidad pública, pero es la consejería de Sanidad de cada comunidad autónoma la que puede exigir que los recursos materiales, los espacios y los profesionales de clínicas u hospitales privados se pongan al servicio del interés común. Los gobiernos autonómicos pueden reclamar los



Palacio de Hielo de Madrid habilitado como morgue para fallecidos por COVID-19

recursos de la sanidad privada para ponerlos al servicio de la respuesta a la pandemia. En el caso de la Comunidad de Madrid, cuyo gobierno es ariete de las derechas y ultraderechas, la estrategia en un primer momento fue poner al servicio de la sanidad camas de hoteles, mientras que se muestran timoratos para exigir lo mismo con clínicas y hospitales privados. Llama la atención, cuando es una de las regiones que más colapsados tiene sus hospitales.

## **También un “escudo social” frente al coronavirus**

Esta declaración tuvo lugar el sábado 14 de marzo, decíamos. Previamente, el Consejo de Ministros se había reunido el día 12 y ya había tomado una serie de medidas encaminadas a frenar la epidemia, en lo sanitario, pero también medidas económicas y sociales para paliar los efectos de la crisis. Así, se reforzaba en 1.000 millones de euros los recursos del Ministerio de Sanidad a través del fondo de contingencia para atender los gastos extraordinarios que generen las necesidades sanitarias y se adelantaban 2.800 millones de euros de los pagos a cuenta a las comunidades autónomas para reforzar sus recursos sanitarios y sociales.

Además, las bajas laborales por enfermedad del coronavirus serían consideradas como accidentes laborales, y se desarrollaron una serie de políticas de ayuda a las familias y empresas y pymes. El Gobierno dota de 25 millones de euros de recursos específicos a las comunidades autónomas para que, mediante becas-comedor, puedan garantizar el derecho básico de alimentación de menores en situación de vulnerabilidad.

De cara a las personas autónomas y a las pymes, se flexibilizaban los aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de seis meses, se inyectarían hasta 14.000 millones de euros de liquidez y se abría una línea de financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial por importe de 400 millones de euros para atender las necesidades de liquidez de las empresas y trabajadores autónomos del sector turístico y otras actividades que se estén viendo especialmente afectadas por la actual situación.

El 17 de marzo, el Gobierno aprobaba un nuevo decreto con medidas para intentar menguar las consecuencias dramáticas de la crisis. Se evidenciaba las tensiones internas en el propio Ejecutivo, distintas sensibilidades políticas y económicas, posiciones favorables a romper con el control del gasto de Bruselas, por un lado, o de ser fieles a las reglas de la austeridad bajo el argumento de ocasionar un menor impacto para la recuperación posterior. Si se podría pensar en un primer momento que estas tensiones evidenciaban las diferencias entre las dos patas de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, pronto se supo que no era así. Integrantes socialistas del Consejo de Ministros también se oponían a la línea pro-austeridad de la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, apoyada durante todo este tiempo por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Las ministras económicas temen que el post de la pandemia suponga un nivel de deuda enorme.

---

*Se evidenciaba las tensiones internas en el propio Ejecutivo, distintas sensibilidades políticas y económicas, posiciones favorables a romper con el control del gasto de Bruselas, por un lado, o de ser fieles a las reglas de la austeridad bajo el argumento de ocasionar un menor impacto para la recuperación posterior.*

---

A pesar de que desde estos dos ministerios económicos del Gobierno español se intentan paralizar las medidas que tienden a limitar el gasto público, la realidad se impone y como mucho solo consiguen retrasarlas. El Ministerio de Hacienda, desde la crisis del 2008, lleva a cabo un rígido control del gasto público de otras administraciones españolas, tales como gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Que el pasado 21 de marzo la Comisión Europea anunciara la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en boca de la propia Ursula von der Leyen hizo que la ministra de Hacienda levantara el rígido control al resto de administraciones españolas para que estas afronten con todos los recursos posibles la pandemia.

Volveremos a los debates en el seno del Gobierno más adelante. Las disputas ideológicas que están teniendo lugar en el Consejo de Ministros dibujan bien las tendencias políticas que se están fraguando en todo el mundo ante la pandemia. Hasta el propio Donald Trump está adoptando medidas intervencionistas de lo público en los mercados. O disimula que lo hace, para luego dar pasos hacia atrás.

Pero antes de entrar a analizar el debate tenido en el seno del Gobierno, cabe citar qué medidas se adoptaron aquel 17 de marzo. Entre ellas, algunas fueron destinadas a las familias más vulnerables. De esta manera, se destinan 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los Servicios Sociales de las comunidades autónomas y de los entes locales, con especial atención a la asistencia sanitaria de personas mayores, dependientes y colectivos vulnerables. 300 de esos 600 millones se destinan a un fondo específico de contingencia para reforzar la atención a personas mayores, sin techo y en residencias de mayores y dependientes. Esta cuestión la coordina el vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, quien, además, puede requerir para esta labor al Ejército.

Los otros 300 millones de ese fondo irán destinados, precisamente, a la flexibilización de la regla de gasto para que los Ayuntamientos puedan usar su superávit si lo invierten en partidas de atención social. Además, se garantiza el suministro energético y de agua y los servicios de telecomunicaciones a las familias más vulnerables prohibiendo a las empresas cortar los suministros. También se procedía a establecer una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducir sus ingresos durante la actual crisis. Queda fuera, de momento, el incluir también una moratoria o suspensión en el pago de alquileres. Esta era una reclamación de Unidas Podemos en el seno del Ejecutivo que aún no se ha podido llevar a cabo. Está candente el debate y es la próxima gran decisión que tendrá que tomar el Gobierno.

Infografía del Plan de Choque Social con un fondo amarillo y tres columnas de texto. En la parte superior izquierda, el título 'PLAN DE CHOQUE SOCIAL' en letras azules grandes. A la derecha, el hashtag '#PlanDeChoqueSocial' y tres iconos de virus azules. Las columnas están encabezadas por 'Alquiler', 'Ingresos' y 'Sanidad'.

Alquiler	Ingresos	Sanidad
Suspensión del pago del alquiler, de la hipoteca y de los suministros básicos (luz, agua y gas) para quien pierda ingresos	Ningún despido y renta básica para quien se quede sin ingresos	Intervenir la sanidad privada sin compensación económica

Campaña #PlanDeChoqueSocial

Poco a poco van calando en Moncloa algunas de las ideas que los principales movimientos sociales y organizaciones sindicales han puesto sobre la mesa, ante el desastre económico y social que se vislumbra tras el peor momento de la pandemia. Llama la atención la gran movilización, por redes sociales obviamente, no están permitidas las manifestaciones en la vía pública, en favor de un “Plan de Choque Social”. Una de las reclamaciones básicas era la suspensión del pago de alquileres y de

suministros básicos, así como de hipotecas. En materia laboral, se reclamaba que se prohibieran los despidos de trabajadores.

Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la ministra es Yolanda Díaz, integrante de IU en Galicia En Común, la confluencia con la que Unidas Podemos se presenta en la comunidad gallega, también se impulsaron una batería de medidas en consonancia con el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, de José Luis Escrivá.

Para evitar los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), el Gobierno facilita los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). De este modo, todos los trabajadores afectados por estos procedimientos tendrán derecho a cobrar el paro aunque no cumplan con el periodo de cotización mínimo exigido para ello y no se considerará consumido el tiempo que dure la percepción de esta prestación. Además, se impulsa el teletrabajo, a través de una dotación a las empresas para la compra de ordenadores y se permite a los trabajadores reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo, siendo posible una reducción del 100% de la jornada.

En cuanto a los autónomos, se les flexibiliza el acceso a la prestación por cese de actividad y se les exime del pago de cotizaciones a los que pierdan el trabajo. Además, se establece una prestación extraordinaria por cese de actividad sujeta a una regulación distinta a la ordinaria. De esta manera, el autónomo podrá pedir un ERTE para sus trabajadores y solicitar, al mismo tiempo, el cobro de una prestación extraordinaria por cese de actividad, sin obligación de cotizar mientras dure esta situación excepcional.

También, a los trabajadores fijos discontinuos, a tiempo parcial y cooperativistas, se les facilitará el cobro de prestaciones por desempleo. Se permite la prórroga automática de prestaciones por desempleo, para impedir que se pierda el derecho al no poder acudir a las oficinas de los servicios públicos de empleo y se blindan las empresas españolas que operan en sectores estratégicos para impedir que la caída de su cotización por las medidas adoptadas para frenar el coronavirus les haga presas fáciles de compañías de fuera de la Unión Europea. En el ámbito científico, se destinan 30 millones al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto de Salud Carlos III para proyectos que investiguen el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus.



UME limpia y desinfecta residencia Virgen del Rocío. (Foto: Alberto Díaz)

Además, otra medida adoptada por el Ejecutivo es que la sanidad y servicios sociales públicos se encarguen de las residencias de ancianos en manos de empresas privadas, tras el gran número de personas infectadas y fallecidas en las mismas. Las residencias pasan a ser prioritarias, la Unidad Militar de Emergencias (UME) podrá intervenir en ellas si así lo reclama la comunidad autónoma y serán de los primeros centros a los que llegarán los test rápidos de covid-19 comprados por el Gobierno español.

En los últimos días se han decretado algunas medidas más de calado social. De esta manera, el día 27 de marzo el Gobierno, mediante el Ministerio de Trabajo, anunciaba el veto a los despidos causados por la crisis del coronavirus. Los despidos que las empresas realicen por fuerza mayor o causas objetivas de carácter económico, técnico, organizativas o de producción, que se justifiquen por el impacto de la pandemia, no estarán permitidos, serán despidos nulos.



Además, el Consejo de Ministros del domingo 29 de marzo endurecía las medidas del confinamiento anunciadas por el presidente del Gobierno la noche anterior en una comparecencia televisada. Si en la declaración del estado de alarma de dos semanas antes, como hemos visto, se promocionaba el teletrabajo, pero no se prohibía que siguiera adelante la actividad laboral de los sectores no esenciales, ahora sí. La medida estará vigente desde el lunes 30 de marzo hasta el miércoles 8 de abril. En total ocho días laborables.

Teniendo en cuenta que desde el 9 al 12 de abril es periodo vacacional de Semana Santa, el confinamiento endurecido se mantendrá hasta el domingo 12 de abril.

---

*Teniendo en cuenta que desde el 9 al 12 de abril es periodo vacacional de Semana Santa, el confinamiento endurecido se mantendrá hasta el domingo 12 de abril.*

---

Con el objetivo de cortar la propagación del virus, en un momento en el que el número de muertos ha aumentado vertiginosamente y en que los hospitales y las UCI están al borde del colapso, la lista de trabajos esenciales se limita. Así, se crea la figura del “permiso retribuido revisable”, mediante la cual no se podrá trabajar en el resto de actividades no esenciales hasta después del 12 de abril, pero se mantienen los salarios de los trabajadores que deberán devolver estas horas a las empresas antes del 31 de diciembre de este año. El cómo devuelva el trabajador las horas al empresario será negociado por los sindicatos, que adquieren un especial protagonismo con Díaz en el Ministerio de Trabajo. La ministra viene de familia sindicalista.

## **Un Gobierno de coalición para gestionar la crisis**

Algunos de los debates que están teniendo lugar en el Consejo de Ministros han trascendido a la opinión pública española a través de los medios de comunicación. Según hemos podido saber, se pueden distinguir tres sectores en el Gobierno según sus posicionamientos sobre cómo afrontar la crisis sanitaria, en primer lugar, pero también la recuperación económica y social una vez la epidemia haya sido superada. Por un lado, el sector más proclive a la ortodoxia con la regla del gasto encabezado por Calviño y Montero. Por otro, los ministros de Unidas Podemos y otros socialistas más proclives a aumentar la deuda para dotar al Estado del mayor colchón social durante esta crisis y, después de ella, medidas keynesianas de clara raigambre socialdemócrata. En otro sector se encontraría el presidente Sánchez, quien escucha y se deja influir por unos u otros en cada momento.

Y es que la composición del primer Gobierno de coalición de la actual etapa política española es una coalición en la que están representados no dos partidos, PSOE y Unidas Podemos, sino más. Unidas Podemos ya es una coalición de distintos partidos de izquierdas, entre los que está Podemos, el principal, que aporta dos ministros el Ejecutivo, Pablo Iglesias vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, e Irene Montero, ministra de Igualdad. Izquierda Unida hace lo propio con Alberto Garzón, ministro de Consumo. También es militante de IU la actual ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, pero entra como integrante de Galicia En Común, la coalición con la que Unidas Podemos concurre a los comicios en Galicia. Por parte de En Comú Podem, la confluencia catalana, el ministro de Universidades, el independiente y reputado intelectual Manuel Castells.

Por parte de los socialistas, además del presidente Sánchez, el PSOE aporta tres vicepresidentas: Carmen Calvo, la vicepresidenta ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes; Nadia

Calviño, de Economía y Transformación Digital; Teresa Ribera, de Transición Ecológica y Reto Demográfico que, sin embargo, es independiente y no forma parte de ningún partido. Cabe destacar que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, es integrante del PSC, el partido hermano del PSOE en Catalunya.

Además, por parte del PSOE hay independientes como la ministra de Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, el anteriormente citado José Luis Escrivá. Son ministros con carnet del PSOE: la ministra de Hacienda y Portavoz, el ministro de Justicia, la ministra de Defensa, el de Interior, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la de Industria, Comercio y Turismo, el de Agricultura, Pesca y Alimentación, la de Educación y Formación Profesional, el de Ciencia e Innovación, la de Política Territorial y Función Pública y el de Cultura y Deportes.



Comité de gestión técnica del coronavirus 24/02/20 (Foto: La Moncloa)

Con la declaración del estado de alarma, además, se prioriza al Ministerio de Sanidad frente al resto, y tras él, Defensa, Interior y Transportes. Estos cuatro ministros, junto al presidente Sánchez, son quienes han asumido la responsabilidad de conducir el país durante la emergencia. También las vicepresidencias, claro, en un segundo nivel. En un primer momento, parecía que Sánchez ponía al mando solo a integrantes socialistas del Gobierno, pero dos noticias

demuestran que el presidente sigue confiando en el trabajo de Iglesias: el líder de Podemos ha entrado a formar parte de la comisión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y, por otro lado, es quien coordina los servicios sociales de todas las autonomías, incluso podrá reclamar acciones al Ejército en este sentido.

## El debate: ortodoxia neoliberal o gasto público

Es importante entender la composición del Gobierno de coalición para comprender los debates que están teniendo en su seno durante estos días. El sector más reactivo a medidas de escudo social estaría formado por Calviño, de Economía, y Montero, de Hacienda. También por la vicepresidenta Calvo y el ministro de Interior. Sin embargo, hay ministros provenientes del PSOE que son muy partidarios de incrementar el gasto público lo que haga falta durante la actual crisis. Es el caso de Escrivá, responsable de Seguridad Social, como ya hemos comentado, pero también el de Transporte, la de Transición Ecológica o la de Industria. Escrivá entraba en el Ejecutivo hace unas semanas como adalid de las políticas pro austeridad, provenía de la presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Ha supuesto una sorpresa.

Por descontado, los ministros de Unidas Podemos apuestan por cuantas más medidas sociales se puedan poner en práctica, mejor. En este sentido, Iglesias argumenta que es necesario aprender de los errores del 2008, una crisis económica que se saldó con cotas mayores de desigualdad. Así,

desde Unidas Podemos defienden que es necesario “que esta crisis no la paguen los de siempre” y que, para salir de esta, “no nos podemos dejar a nadie atrás”. En palabras de Iglesias, si no se consigue garantizar un “escudo social” para los sectores más vulnerables, se estará dando pista de aterrizaje a la ultraderecha para lo que venga después de la pandemia del coronavirus.

En este sentido, llama la atención como movimientos sociales reclaman desde las redes sociales con distintas campañas medidas sociales al Gobierno. Unidas Podemos, que siempre ha alardeado de ser una fuerza política que tiene una pata en la institución y otra en las calles y movilizaciones, parece escucharlas. Hay conexión entre los movimientos y esta parte del Gobierno. Antes hablábamos de la campaña “Plan de Choque Social” impulsada por decenas de colectivos. Estas propuestas ayudan a los ministros más izquierdistas a desequilibrar la balanza hacia una solución social de la actual crisis.

---

*“Si no se consigue garantizar un “escudo social” para los sectores más vulnerables, se estará dando pista de aterrizaje a la ultraderecha para lo que venga después de la pandemia del coronavirus” (Pablo Iglesias)*

---

Los debates en el seno del Consejo de Ministros son de gran altura intelectual, casi académicos, muestra de la alta capacidad y preparación de la mayoría de sus componentes. En el aspecto económico, los cruces de reproches y argumentos entre, por un lado, Garzón, de Consumo, y el ministro de Seguridad Social y, por otro, las responsables de Economía y Hacienda, son habituales. Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida y economista de formación, de filiación política comunista, ha encontrado en el ministro de Seguridad Social un aliado para confrontar con las propuestas más neoliberales de las ministras económicas. ¡Quién lo diría!

Durante estos días, las discrepancias que han trascendido a los medios de comunicación, a través de filtraciones interesadas de componentes del Gobierno, han sido muchas. Ya el día 14, las discusiones en el seno del Consejo de Ministro retrasaron la comparecencia del presidente para decretar el estado de alarma varias horas. La responsable de Economía, Calviño, intentó evitar que esta declaración se hiciera hasta el último momento. Los ministros de Unidas Podemos se mantuvieron firmes. Sánchez apostó por limitar los movimientos de la ciudadanía para evitar la expansión de la epidemia. Calviño tendría que ceder en su ortodoxia neoliberal, la ministra de Economía apostaba por tocar lo menos posible la actividad económica.



Pablo Iglesias y Nadia Calviño en el Congreso de los Diputados. (Foto: EFE)

Antes de esto, Díaz, ministra de Trabajo, ya fue desautorizada públicamente por la ministra de Hacienda, cuando redactó una guía sobre cómo actuar en el ámbito laboral ante la llegada de la pandemia a España. La ministra de Trabajo se anticipó a lo que venía y ya el 5 de marzo hacía público este documento que incluía la posibilidad de que fueran los propios trabajadores los que paralizaran la actividad de la empresa en el caso de que no se cumplieran los protocolos de seguridad frente a la enfermedad.

Las discrepancias han continuado desde entonces. El 17 de marzo, Sánchez anunciaba un paquete de inversión pública. "Quiero enviar a nuestras empresas y al mercado un mensaje rotundo: el Estado español va a proporcionar a nuestro tejido empresarial toda la liquidez que necesite para mantenerse operativo", anunciaba. Esto supone que el Estado movilizará 200.000 millones de euros. De ellos, entre 150.000 y 200.000 millones de euros en préstamos y líneas de avales a empresas para limitar al máximo el freno de la economía. Este dinero no supone un coste presupuestario, pues se consideran préstamos que habrán de regresar a las arcas del Estado.

Ese mismo día sí que se anunciaban medidas económicas que saldrán directamente de los presupuestos públicos y suponen la cantidad de 17.000 millones de euros para asumir una parte del coste salarial para las empresas con dificultades económicas, ayudar a los trabajadores afectados y garantizar una prestación a los autónomos. Desde algunos sectores izquierdistas y movimientos sociales se ha criticado la comparación: 200.000 millones en préstamos para las empresas, mientras que tan solo 17.000 han ido a parar en ayudas directas a familias pymes. Además, se apostaba por flexibilizar los ERTE, para que los ajustes de plantilla de las empresas sean temporales y no definitivos. También se aprobaba la puesta en marcha de una prestación para autónomos que pierdan un volumen importante de su facturación.

---

*La doctrina Calviño va retrocediendo poco a poco frente a la hecatombe que viene. La relación entre Sánchez e Iglesias se ha ido fortaleciendo, por el contrario.*

---

El debate en el seno del Consejo de Ministros para aprobar este “escudo social”, en palabras del propio Gobierno, se alargó hasta bien entrada aquella madrugada. Siempre una tensión constante: la ortodoxia de la regla de gasto de Calviño y Montero frente a la inversión estatal para paliar los estragos sociales del momento. Desde otros países europeos con gobiernos menos escorados en la izquierda llegaban noticias de medidas de aumento del gasto público. La doctrina Calviño va retrocediendo poco a poco frente a la hecatombe que viene. La relación entre Sánchez e Iglesias se ha ido fortaleciendo, por el contrario.

El debate que viene se centra en ampliar las medidas de este “escudo social”. Ahora es el turno de, una vez lograda la moratoria hipotecaria por parte de los sectores izquierdistas del Ejecutivo, aumentar la cobertura incluyendo una moratoria del pago de los alquileres. También se ha llegado a plantear la posibilidad de una renta básica para la ciudadanía. Muchas familias han perdido los ingresos y una medida así aseguraría que sigue entrando liquidez en los hogares. Calviño no quiere oír hablar de ello, de momento.

Otra postura defendida por la titular de Economía es no paralizar completamente la economía, salvo las empresas esenciales. Esto implicaría aumentar las restricciones, como ya se ha hecho en Italia, de movilidad. Tampoco quiere oír hablar Calviño de esto, aunque sectores del Gobierno liderados por Escrivá y los ministerios de Unidas Podemos aseguran que es lo que hay que hacer, poniendo el ejemplo de Italia. Conforme la crisis sanitaria se iba agudizando en el país italiano, las restricciones se han ido endureciendo.

Con el endurecimiento del confinamiento, antes explicado, del 29 de abril, prohibiendo que se desarrollen los trabajos no esenciales hasta el próximo 12 de abril, con la puesta en marcha del permiso retribuido revisable en el que se le da especial poder de negociación a los sindicatos y con la prohibición de los despidos, de nuevo, el ala amiga de la ortodoxia neoliberal da un paso atrás en el Gobierno. Pero los debates siguen.



Eurogrupo decide rescate a la banca española. (Foto: EFE)

Así, según ha trascendido, Unidas Podemos reclama un impuesto a la banca para que devuelvan los 65.000 millones con el que el Estado rescató a las entidades bancarias en la crisis del 2008. Otra propuesta que Unidas Podemos pondrá, antes o después, encima de la mesa es un impuesto para las grandes fortunas. De la misma manera, hay otros debates pendientes. El principal, por el volumen de personas que se pueden ver afectadas, es la supresión de los

alquileres, según quiere Unidas Podemos, o una moratoria de los mismos, abanderada por algunos ministros del PSOE. Otra reclamación de los sectores izquierdistas del Ejecutivo es la puesta en marcha de una Renta Mínima para asegurar unos ingresos mínimos para las familias más necesitadas. También está encima de la mesa un subsidio para aquellas empleadas del hogar que durante esta crisis hayan perdido los empleos. Este sector, mayoritariamente femenino, trabaja en gran parte en la economía sumergida viéndose privado de derechos laborales.

---

*Otra reclamación de los sectores izquierdistas del Ejecutivo es la puesta en marcha de una Renta Mínima para asegurar unos ingresos mínimos para las familias más necesitadas.*

---

## **Un discurso de izquierdas frente a la pandemia**

El vicepresidente Iglesias, líder de Podemos, intervino ante la opinión pública el pasado día 19 de marzo. Aprovechó para anunciar las medidas que desarrollará otorgando carácter prioritario a los Servicios Sociales como un “segundo escudo” ante el covid-19. Iglesias coordinará los Servicios Sociales de todas las comunidades autónomas para ayudar a los sectores más vulnerables a capear el temporal: ancianos y personas y familias en riesgo económico. Para ello, podrá reclamar la intervención de las Fuerzas Armadas.

Pero la intervención también supuso una disquisición teórica sobre lo que viene y cómo afrontarlo desde una posición de izquierdas “que no deje a nadie atrás”. “Hay que priorizar el empleo y la económica de los hogares”, aseguró, frente a los sectores del Gobierno, anteriormente descritos, que siguen mirando hacia la regla de gasto público como un horizonte de cara a la recuperación posterior a la crisis.

Podemos es la expresión política más plausible surgida como consecuencia de la anterior crisis económica del 2008. El movimiento 15M explotó en 2011 como reacción a aquello bajo el lema de “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. Tres años después, surgía Podemos, una nueva formación política que se enfrentaba a la “vieja política”, a los partidos tradicionales, y también al neoliberalismo como expresión económica dominante que pone el beneficio de los mercados por encima de las condiciones de vida de la gente.

Frente a la respuesta política que se dio en aquel momento a la crisis, recetando políticas de austeridad económica, Iglesias ahora apuesta por “salir de la manera opuesta, utilizando los resortes y mecanismos del Estado para proteger a los trabajadores”. “Tenemos que aprender de aquella experiencia y apostar por reforzar de cara al futuro los servicios públicos porque son el único cordón de seguridad”.



Trabajadora Samur hablando con persona sin hogar (Foto: Luis de Vega Hernández / El País)

---

*Está en juego que el siglo XXI no sea más horrible que el pasado siglo XX.*

---

“No solo estamos en una emergencia sanitaria, sino también económica y social, lo que significa que no se puede dejar a nadie desatendido en lo sanitario, pero tampoco en lo económico y social”, aspira Iglesias. El vicepresidente social del Gobierno es consciente de que “hay que responder a esta situación con todos los instrumentos de que disponemos sin escatimar esfuerzos”. Es consciente de ello para frenar algo que puede venir después: que ante la inseguridad y el miedo que la pandemia está generando en todo el mundo, las opciones de ultraderecha que campan a sus anchas desde hace un lustro por el mundo tomen la delantera y el mundo que llegue sea, sustancialmente, peor en lo político. Está en juego que el siglo XXI no sea más horrible que el pasado siglo XX.